

CASTILLA Y LEÓN

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

mantiene su compañía con Castilla y León, con el que «estamos desarrollando continuamente proyectos, el último de los cuales fue presentado la semana pasada». «Este compromiso no se ejemplifica sólo en la cantidad de estudios clínicos puestos en marcha sino en la calidad, porque más de la mitad de esos estudios son en fases tempranas, lo que se denomina fases uno y dos, donde hay más *gaps*, más falta de conocimiento».

Aludió también a la colaboración con Sacyl, «con seis proyectos de colaboración público-privada en marcha para la mejora asistencial en áreas terapéuticas como la oncohematología, cardiología, reumatología y oftalmología, que se aplican tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria».

Los 12,9 millones que costará la planta de Castellanos de Moriscos suponen una inversión reforzada en I+D+i, lo que permitirá incrementar el peso de la inversión industrial de este territorio «que va a marcar la diferencia frente a otras comunidades donde la inversión está mucho más apalancada en el sector servicios», agregó el directivo burgalés. En su opinión, con esta implantación en Salamanca, la compañía va a «favorecer el crecimiento económico de la región en un momento de alta competitividad internacional» así como «contribuir a evitar un gran riesgo en la provincia como es la despoblación».

A la presentación de este proyecto acudieron varios representantes autonómicos, provinciales y locales. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se confesó «feliz de haber participado en la gestación de esta iniciativa» y explicó que «Salamanca se ha convertido en un eje en la lucha contra el cáncer en Europa, «un ecosistema en la investigación oncológica en el que ya participaba Novartis, líder en investigación biomédica».

La compañía farmacéutica colabora con la Universidad de Salamanca en la Cátedra Extraordinaria de Terapias Avanzadas Novartis-USAL; tiene vínculos y proyectos compartidos con el IBSAL y con el Hospital de Salamanca, uno de los más avanzados de España en áreas como la hematología y oncología y uno de los pocos autorizados, por ejemplo, para realizar terapias celulares CAR-T, tal y como recordó Fernández Mañueco. La nueva planta de Castellanos de Moriscos creará aún «más sinergias» en esta Red de Investigación Oncológica.

«Siempre ponemos alfombra roja a quien quiere invertir, innovar, investigar y crecer en Castilla y León y eso es lo que hemos hecho aquí», precisó el jefe del Ejecutivo.

Trabajo suprime las visitas de agentes sociales a empresas por su «alto coste»

El director general sostiene «la falta de eficacia» de las medidas actuales / CCOO acusa a Industria de «mentir» en los números y cuantías a los agentes sociales

RAÚL RUANO VALLADOLID

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte anunció que «se elimina la visita de asesoramiento de agentes económicos y sociales a empresas». Justificó esta medida por su «alto coste» y ser un «recurso ineficaz».

A mayores, detalló la cantidad económica destinada a cada uno de ellos en materia de prevención de riesgos laborales. De la Parte señaló que en los últimos diez años la CEOE recibió 9.521.889 euros, CCOO 5.859.850€ y UGT 5.859.850€ para un total de 20.841.590 euros en materia de prevención de riesgos laborales.

El director general de Trabajo apuesta por una prevención «más coherente». Tras anunciar estas cifras, detalló los 449 euros por visita cobrados por CEOE, los 815 euros por UGT y los 824 euros por CCOO, cuando, en su opinión, no han sido «eficaces» ni han incidido en una menor siniestralidad, ya que está «se encuentra en pleno ascenso».

Señaló que las visitas de asesoramiento de los agentes económicos «son escasas». Afirmó que desde UGT son inferiores a 13 al mes, desde CCOO 11 y las de la CEOE menos de siete. Aseguró que un «técnico medio de la Junta realiza 30 visitas mensuales», además de «elaborar informes» y otras actividades.

De la Parte criticó el «ruido» generado por el recorte de «gasto su-



El director general de Trabajo, Fernando de la Parte. ICAL

perfluo» a los agentes sociales. «Queremos financiar medidas que ofrezcan una certeza de eficacia», declaró.

«Las visitas o cambian condiciones de trabajo o no sirven para nada», indicó. Además, sentenció que «se trabaja de cara a la galería» donde se refirió a medidas como la cátedra del prevención de riesgos laborales de Salamanca.

Por otro lado manifestó que está en fase de consulta la nueva estrategia de seguridad salud y bienestar destinada a «no derrochar un céntimo de euro» porque «no solo importa la salud física sino la salud mental una asignatura pendiente».

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, compareció por petición del PSOE para informar sobre los accidentes

de trabajo de 2021 y 2022 en Castilla y León.

Castilla y León contabilizó 42 accidentes mortales en jornadas laborales durante el año 2021.

Durante el año 2021 se registraron 27.860 accidentes de trabajo con baja en la Comunidad, de los cuales 25.367 se produjeron durante la jornada de trabajo. La cifra de accidentes sin baja aumenta en 2.779 casos respecto al año 2020 con 35.861.

En relación a los datos de enero a agosto de 2022, los fallecidos por accidentes laborales alcanzan los 38 trabajadores. Los accidentes que han precisado de baja laboral han sido 17.302, de los cuales 17.123 han sido de carácter leve y 141 de carácter grave.

De los accidentes en los que un

trabajador perdió la vida este año, 16 se deben a infartos e ictus, ocho están relacionados con el tráfico, cuatro por caídas de altura, tres por aplastamiento, uno por atrapamiento, uno por atropello, uno por sepultamiento, uno por caída de objetos, uno por coronavirus, uno por quemaduras e inhalación de humos y uno por contacto directo. Todo según los datos facilitados por Fernando de la Parte Alcalde.

RESPUESTA DE CCOO

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, acusó ayer a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de «mentir de manera sistemática» en los números y las cuantías económicas, en un desconocimiento total del mercado de trabajo.

Fraile responde a lo que califican de «barbaridades» del director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, vertidas en su comparecencia de este martes en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de las Cortes.

«Mienten en los números, en las cuantías económicas y muestran un desconocimiento total del mercado de trabajo», afirma en un mensaje en Twitter recogido por Ical, tras escuchar al director general avanzar que se suprimirán las ayudas de asesoramiento a los agentes sociales en sus visitas a empresas en relación con los riesgos laborales.

CES avisa que incluir más agentes en el Diálogo Social exige cambiar la ley

VALLADOLID

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, aseguró ayer que la entrada de nuevos actores en el Consejo del Diálogo Social obliga a una modificación de la legislación estatal y autonómica. De esta manera, salía al paso de las declaraciones del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien la semana pasada anunció que la Junta abrirá el Diálogo Social, durante el trámite participativo para negociar nuevos acuerdos en materia de políticas activas de empleo, a otros sindicatos «importantes» y con representatividad como CSIF, CGT y USO y a las Cámaras de Comercio y la asociación Empresa Familiar, por parte de la patronal.

Con motivo de un encuentro con

sindicalistas latinoamericanos para intercambiar experiencias y dar a conocer el Diálogo Social de Castilla y León, Cabero apuntó que el Estatuto de Autonomía y la ley que regula el Consejo del Diálogo Social definen el Diálogo Social. En concreto, citó la articulación se hace en el marco constitucional, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores. «El Diálogo Social es el que hay y cualquier cambio supondría una modificación normativa. Me parece, y hablo como presidente y no como representante de toda la institución, que el Diálogo Social es con los interlocutores existentes en la actualidad. No puede ser de otra manera», sentenció.

El presidente del CES reiteró, según recogió la Agencia Ical, que la representatividad sindical y de las

organizaciones empresariales está regulada a nivel estatal, al ser competencia del Estado. Por lo tanto, precisó que los interlocutores con el Gobierno son los sindicatos más representativos y la organización empresarial que tiene la mayor representatividad. «Es lo que hay ahora y es lo que ha funcionado correctamente», añadió.

CEOE NO QUIERE «PELEA»

El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, se pronunció sobre el anuncio de la Consejería de Empleo de abrir el Diálogo Social a otras instituciones como las cámaras de comercio o Empresa Familiar y aseguró que la patronal no participará en otra «pelea» sobre este tema como la que tuvo lugar la pasada legislatura, cuando desde Ciudadanos también



Enrique Cabero. ICAL

se propuso su modificación.

Aparicio afirmó que en estos momentos «hay cosas más importantes que hacer por esta Comunidad» que enfrascarse en esta «pelea» y aseguró que la Constitución establece de forma clara quienes integran el Diálogo Social. Recalcó que aunque «todo es mejorable», el Diálogo Social también está estipulado en el propio Estatuto de Autonomía.

La pandemia «tumba» al menos 2.000 comercios, un 5% por ciento del total

- ▶ El sector cuenta con 35.000 empresas y mantiene el empleo en unos 140.000
- ▶ Un estudio de CEOE revela que supone el 8,9% de la economía y el 15% de los cotizantes

ISABEL JIMENO
VALLADOLID

Escaparates que ahora sólo lucen polvo, vitrinas que ya no se encienden, persianas bajadas para siempre... Es el escenario que dibujan muchas calles en Castilla y León, donde los comercios no han sido ajenos al Covid. El coronavirus, que todavía sigue captando víctimas, también ha infectado a un sector «estratégico» en la Comunidad, que resiste pero con heridas. Tanto que desde que se comenzó a propagar en 2020, «la pandemia ha tumbado» a un 5 por ciento de las empresas del sector.

Aunque algunos se han lanzado en este tiempo a la aventura de emprender y abrir un nuevo negocio en busca de clientes, el balance arroja un panorama con unos 2.000 empresas dedicadas al comercio menos que hace dos años. Así lo ha constatado un estudio sobre el sector en la economía de Castilla y León encargado por la Comisión de Comercio de CEOE a la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid (Uva), que refleja que ahora son algo más de 35.000 (35.371) las que siguen abiertas para atender a sus clientes.

La incisión hecha por el Covid ha



José Antonio Salvador Insúa, Julio Casado y Santiago Aparicio, en la presentación del informe // IICAL

sido la más profunda de los últimos tiempos en un colectivo que desde que en 2008 se abrió la anterior crisis –la de la explosión de la burbuja inmobiliaria– venía perdiendo ‘sangre’ en su tejido. Una de cada cinco empresas que había entonces «ha desaparecido», según detalló el decano de la Facultad de Comercio de la Uva, José Antonio Salvador Insúa.

La sangría ha afectado especialmente a las «pequeñas», pues si el número de empresas ha menguado en un 20

por ciento –cerca de 9.000 menos–, el «empleo se ha mantenido». Así, mientras se ha reducido el número de autónomos, se ha incrementado el de asalariados, hasta mantenerse una base laboral de 140.000 trabajadores en el comercio, lo que supone que 15 de cada cien afiliados a la Seguridad Social son cotizantes de este sector. Distribuidos, además, prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres. Y con datos, subrayó el profesor, que llaman la atención como que algo más del 85 por

ciento son indefinidos, unos once puntos «por encima» de la media de otros sectores, pese a la creencia extendida de la temporalidad. La caída en el número de comercios «no» presenta «grandes» diferencias entre provincias, aunque sí con casos destacados, como la «reducción más significativa» en el caso de Palencia, y algo menos en Zamora. Por contra, se han mantenido «mejor» Valladolid y Ávila y Segovia, gracias al tirón del turismo.

Se trata de un sector «básico» en la

EL PRESIDENTE DEL CES Y EL DE CEOE

Advierten de que abrir el Diálogo Social exige modificar la ley

ABC/I. J. VALLADOLID

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, advirtió ayer de que la entrada de nuevos actores en el Consejo del Diálogo Social obliga a una modificación de la legislación estatal y autonómica. De esta manera, salía al paso de las declaraciones del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien la semana pasada anunció que la Junta abrirá a otros agentes «importante» este órgano de concertación en el que desde hace más de dos decenios se sientan Junta, CEOE, CCOO y

UGT. «El Diálogo Social es el que hay y cualquier cambio supondría una modificación normativa. Me parece, y hablo como presidente y no como representante de toda la institución, que el Diálogo Social es con los interlocutores existentes en la actualidad. No puede ser de otra manera», sentenció tras hacer referencia a la regulación según el Estatuto de Autonomía y la ley que regula el Diálogo Social, informa Ical. Cabero se pronunció así con motivo de un encuentro con sindicalistas latinoamericanos para intercambiar experiencias y dar a conocer el Diálogo Social de Castilla y

León. A su juicio, la propuesta de Veganzones afecta al funcionamiento de la Consejería.

También a la normativa legal apeló el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. «Nosotros creo que ya hemos pasado página en estos temas», respondió, a la vez que dudó que el cambio legal que se exige para dar entrada a nuevos miembros sea viable. «Todo es mejorable, pero de ahí a modificar las estructuras del Diálogo Social...», cuestionó Aparicio, quien recordó que ya la pasada legislatura Ciudadanos lo intentó. «Nosotros no vamos a estar ya en esa pelea porque creo que hay cosas más importantes que hacer por esta Comunidad que estar en la pelea con un partido político de que si el diálogo social o si funciona de esta manera u otra. Está muy claro como está definido», sentenció.



En el encuentro sindical en el CES // IICAL

economía de Castilla y León «durante la pandemia» y que «lo sigue siendo», destacó también el presidente de la Comisión de Comercio de CEOE, Julio Casado, también director de Relaciones Institucionales de Mercadona en Castilla y León. No en vano, las más de 35.000 empresas que mantiene abiertas suponen «casi una de cada cuatro» de las que hay activas en la Comunidad –el 22,5 por ciento, con especial peso de las minoristas– y suman el 65% del empleo.

«Motor primordial»

Representan, destacó también el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, el 8,9 de la economía regional –un «poquito» por debajo de la media nacional, donde los lugares de costa tienen más actividad–, y más de 13 por ciento del conjunto de los servicios, el más voluminoso. «Un motor primordial», junto con la industria y lo agrario, y que lo «sigue siendo, pese a las dificultades», valoró Aparicio sobre un «sector estratégico» que, además, resaltó, está «muy asentado y apegado» al territorio.

El estudio también constata el incremento de la productividad en casi un 28 por ciento entre 2011 y 2018, cerca del triple que el resto de sectores. Son momentos en los que «toca pelear mucho», en los que están «aguantando, siendo imaginativos, con mucho esfuerzo», reconoció Casado. Entre los retos, afrontar el cambio en la forma de consumo. Hay colectivos en los que se ha disparado la adquisición vía web. Destaca la ropa, donde ha crecido un 236% el consumo a través de internet, aunque una «parte importante», adquirida en sitios de fuera, el «80%» en referencias web radicadas en el extranjero. Tres de cada diez comercios de la Comunidad ya están digitalizados. «No todo pasa por lo on-line», advirtió el decano, quien abogó por «trabajar en el comercio presencial adaptada al cliente». Eso sí, se mantuvo cauto sobre la posibilidad de un cambio en los horarios de apertura. Un «tema escabroso», reconoció en el que llamó a «pensar a quien beneficia, si a nuestros comerciantes o a otros de más lejos».



El director general de Trabajo, Fernando de la Parte, en las Cortes // ICAI

Empleo eliminará las visitas de patronal y sindicatos a empresas por caras e «ineficaces»

► Nuevo cabreo de UGT y CCOO con la Consejería por «mentir sistemáticamente»

I. J. VALLADOLID

Nuevo conflicto abierto entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo con los agentes económicos y sociales –CEOE, CCOO y UGT–. Sin apagar el que era el último fuego tras el anuncio del consejero, Mariano Veganzones (Vox), de su pretensión de abrir el Diálogo Social a más colectivos, ayer su director general de Trabajo y Relaciones Laborales, Fernando de la Parte, prendió otra mecha, que encendió la airada respuesta de los sindicatos mayoritarios. Todo después de que el director general anunciase en una comparecencia en las Cortes su intención de meter la tijera y eliminar lo que reciben patronal y centrales sindicales en materia de prevención de riesgos laborales al considerar que los datos de siniestros en el trabajo demuestran su ineficacia.

«Nosotros no vamos a financiar organizaciones cuyo interés se agota en sí mismo, que traicionan los intereses de aquellos a quienes deberían defender y utilizan, sin el más mínimo escrúpulo, datos tan sensibles como los accidentes de trabajo para aferrarse a una financiación que han demostrado no merecer», espetó De la Parte, en una intervención en la que apeló una y otra vez al sello de Vox desde que llegó al Gobierno de Castilla y León.

Así, De la Parte avanzó que se suprimirán las visitas de asesoramiento de sindicatos y patronal a las empresas por su «alto coste» y ser un «curso ineficaz». «No vamos a consentir que se despilfarre un solo euro de nuestros ciudadanos en gasto superfluo que no revierta en la mejora del bienestar de los trabajadores y empresas», esgrimió el director general, quien detalló lo recibido por los agentes económicos y sociales en los últimos diez años en estos programas: más de 20,8 millones (9,1 para CEOE y casi 5,9 tanto para UGT como para CCOO). Y en este tiempo, «los resultados no son buenos, porque no sólo no han disminuido los accidentes laborales. En 2021, detalló, hubo 27.860 accidentes con baja (25.377 en la jornada laboral y 2.475 in itinere), con 42 víctimas mortales. Y entre enero y agosto de este año, 17.302 (17.123 leves, 141 graves), con 38 fallecidos, cuyo aumento en este caso se debió a patología no traumática como infartos e ictus y accidentes de tráfico, explicó De la Parte.

Desde los sindicatos acusaron a la Consejería de Veganzones de «mentir sistemáticamente», acusaron a De la Parte de un «desconocimiento absoluto» del mercado de trabajo y rechazaron sus datos. «La siniestralidad por accidente con baja en jornada laboral se ha reducido notablemente» desde que en 2003 comenzó el programa de visitas, apuntaron en un comunicado conjunto: de los 42.641 a 25.377 (60 por ciento menos). Ambas organizaciones advirtieron de que «no van a tolerar» a este Departamento que «insinúe» que el incremento de la siniestralidad «es consecuencia de la falta de eficacia de las visitas».

PUNTO DE VISTA



LUIS JARAMILLO

Más de lo mismo

Siempre que se publican los Presupuestos Generales del Estado es inevitable hacer una lectura de los mismos por comunidades, incluso por provincias. Así se dibuja una suerte de escenario para el agravio comparativo y cuando este año, antes de que se conocieran los presupuestos en detalle, escuché a la delegada del Gobierno que serían buenos para la comunidad, muy sociales y que prestaban atención a los pensionistas y las necesidades sociales, colegí que las inversiones pendientes tendrían mínimos avances y seguirían apareciendo esas partidas irrisorias que mantienen los proyectos abiertos para que no se diga que se han olvidado de ellos. Nada de avances claros.

Cuando las cifras se conocieron, se confirmaron las sospechas. Claro que los pensionistas de Castilla y León son atendidos como los del resto de España. Claro que las necesidades sociales se prestan igual que en otros territorios. ¡Faltaría más! Pero lo cierto es que cuando hablamos de las infraestructuras que necesitamos, que se eternizan, no hay la más mínima señal de que en el horizonte inmediato sean una realidad. Eso solo puede calificarse de falta de compromiso con los grandes proyectos y prestar atención a otros territorios que interesan más.

Casi me da vergüenza tener que hablar de la Autovía del Duero, que avanza lentamente donde hay obra, pero que no pone una sola máquina en nuevos tramos. Cantidades irrisorias para proyectos que por lo que se dilatan, deben de ser más complejos de realizar que descifrar las grandes ecuaciones de las investigaciones cuánticas. No la veremos concluida a medio plazo hasta Soria y mucho menos hacia la frontera. Una auténtica vergüenza. Otro tanto se puede decir de la León-Valladolid o de la mejora del peligroso tramo entre Venta de Baños y Tordesillas o de los proyectos Ponferrada-Orense o Burgos-Aguilar de Campo.

En tiempos en los que hay que ajustarse el cinturón, es sabido que las inversiones tienen que bajar, pero lo triste es que a nuestra tierra, salvo para las obligadas obras de paso, siempre le toca ese ajuste. Sé que se me puede tildar de victimista por esta afirmación, pero basta echar un vistazo a lo que está en proyecto para saber que no hay nada nuevo, que son los mismos trazados de siempre, cuya ejecución se eterniza entre acusaciones de que es culpa de unos o de otros. Nunca mejor vino a cuento aquello de que, unos por otros, la casa por barrer.



SOCIEDAD | PLANES TRANSFRONTERIZOS

SPC / COIMBRA (PORTUGAL)

Aunar esfuerzos entre instituciones para relanzar la lucha conjunta contra la despoblación. Estas son las bases del acuerdo firmado ayer entre Castilla y León y la región Centro de Portugal, y que también abarca sectores como la formación superior, la protección de espacios verdes y la industria agroalimentaria a ambas zonas de 'la Raya'. Y es que ambos territorios tienen «realidades y problemas muy parecidos», que parten de «una historia riquísima y un patrimonio cultural y natural extraordinario» pero que, actualmente, afrontan «un problema demográfico importante», significaron el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y la presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro de Portugal, Isabel Damasceno, durante el acto celebrado en Coimbra (Portugal). «Tenemos mucha riqueza pero faltan personas», remarcó la presidenta de la región Centro portuguesa, por lo que llamó a «preocuparnos en conjunto» de encontrar soluciones para atraer «inversiones, proyectos y personas al territorio».

Este acuerdo ofrece «multitud de posibilidades desde un punto de vista económico para resolver problemas y entrelazar ambas poblaciones», explicó Carnero por su parte tras la rubrica del llamado Plan Estratégico de Cooperación Centro de Portugal-Castilla y León 2021-2027. Un plan que incluye reducir los obstáculos jurídicos y administrativos transfronterizos, apoyar la transición energética, mejorar la protección de los parques naturales y la transición digital y fomentar la interconexión con banda ancha universal y servicio 5G.

El objetivo fundamental, como explicó Carnero, es «mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la Raya» entre ambos países, dado que el 25% de la frontera que «mantiene separada y unida a España con Portugal» afecta a Castilla y León. También se abordó, al igual que este lunes con la Región Norte de Portugal, el programa de fondos europeos de cohesión transfronteriza Interreg 2021-2027, que incluye 320 millones para la Raya.

La lucha contra el problema demográfico refuerza los lazos entre CyL y Portugal

Jesús Julio Carnero y representantes lusos suscriben distintos protocolos en materia de cooperación, energía, universidades y espacios naturales



Jesús Julio Carnero e Isabel Damasceno, durante la firma de los acuerdos ayer en Coimbra (Portugal). /ICAL

Igualmente acordaron desarrollar una estrategia común para la gestión natural y ecológica de siete espacios de la frontera entre ambos territorios, con el objetivo de «dar una respuesta conjunta» a desastres naturales como los incendios de este verano pero también para «sacar lo mejor de los siete territorios» a través de la industria agro-

alimentaria de uno y otro lado de la frontera. «Kilómetros donde hay multitud de vicisitudes que afectan a los paisanos castellanos y leoneses y portugueses», y que, por ello, requieren de la respuesta conjunta de la Junta de Castilla y León y la región Centro de Portugal para «mejorar el bienestar» desde la lucha contra el reto demográfico como

gran ámbito de actuación, sostuvo el consejero de la Presidencia.

Por último, buscarán una alianza de las universidades para el desarrollo de proyectos conjuntos que tengan como hilo conductor «las lenguas ibéricas» pero que también se manifiesten «desde el punto de vista del desarrollo económico, social y territorial».

POLÍTICA | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

El CES se niega a abrir el Diálogo Social a más actores: «No puede ser de otra manera»

SPC / VALLADOLID

La propuesta del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, de abrir el Diálogo Social a más entidades sindicales, empresariales y sociales sigue levantando ampollas en Castilla y León. Tras la rotunda negativa de CCOO y UGT a esta decisión, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, también se mostró en contra de esta medida, y

recordó a Veganzones que la entrada de nuevos actores en el Consejo del Diálogo Social obliga a una modificación de la legislación estatal y autonómica.

«El Diálogo Social es el que hay y cualquier cambio supondría una modificación normativa. Me parece, y hablo como presidente y no como representante de toda la institución, que el Diálogo Social es con los interlocutores existentes en la actualidad. No puede ser de otra

manera», sentenció Cabero durante un acto con sindicalistas latinoamericanos. Allí reiteró que la representatividad sindical y de las organizaciones empresariales está regulada a nivel estatal, al ser competencia del Estado. Por lo tanto, precisó que los interlocutores con el Gobierno son los sindicatos más representativos y la organización empresarial que tiene la mayor representatividad. «Es lo que hay ahora y es lo que ha funcionamien-

to correctamente», añadió. «Las consejerías tienen competencia para reunirse con quien quieran pero si hablamos del Consejo del Diálogo Social hay que ir a lo que dice el Estatuto», concluyó.

Por su parte, el presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, aseguró que la patronal no participará en otra «pelea» sobre este tema: «La Constitución establece de forma clara quienes integran el Diálogo Social».

MEDIO AMBIENTE

Las primeras reclamaciones patrimoniales por los incendios llegan a la Junta

SPC / ZAMORA

La Consejería de Medio Ambiente acaba de comunicar a los ayuntamientos de la provincia de Zamora que ya pueden interponer las reclamaciones por los daños provocados en bienes e inmuebles municipales a causa directa de los trabajos de extinción de los incendios forestales ocurridos el pasado verano en la provincia de Zamora. De esta forma, se pretende «reparar y subsanar» los deterioros o «abonar el coste de reparación» a las arcas públicas del municipio. Las reclamaciones de responsabilidad Patrimonial también son aplicables a los particulares afectados por los fuegos.

La delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, trasladó la información a los alcaldes de las distintas localidades afectadas por los fuegos. «La Junta tiene constancia, hasta la fecha, del registro de diez solicitudes de responsabilidad Patrimonial relacionadas con los fuegos zamoranos, aunque cualquier afectado por las llamas dispone de un año para presentar la solicitud de reparación de los desperfectos ocasionados por las llamas», señaló.

PP y Vox niegan la reactivación del Plan 42 antes del 31 de diciembre

SPC / VALLADOLID

Los grupos de PP y Vox rechazan ayer la reactivación ante el 31 de diciembre del Plan 42 para la prevención integral de los incendios forestales, como solicitó el PSOE y recibió el apoyo del resto de la oposición, pese a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció uno nuevo, aunque en 2023. La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes desestimó por los socios de la coalición que sustenta a la Junta la PNL socialista para que antes del 31 de diciembre todas las provincias de la Comunidad cuenten con brigadas de investigación de incendios forestales, BIIF, y se reactive el Plan 42.

La popular Mercedes Cofreces argumentó que Castilla y León fue pionera en 1998 en la creación de estas brigadas que ya realizan el trabajo de investigación y explicó que el Plan 42, que será Plan 42.3, comenzará en 2023, como afirmó que se recoge en el acuerdo de la comisión de seguimiento del diálogo social.

La región ha perdido desde 2008 una de cada cinco empresas de comercio

La reducción afecta más a pequeñas compañías, lo que ha provocado la caída de los autónomos y el incremento de los asalariados

EL NORTE

VALLADOLID. Una de cada cinco empresas dedicadas al comercio han desaparecido en Castilla y León desde 2008, aunque el sector, que representa el 8,9% del PIB autonómico, ha sido capaz de mantener en este periodo el número de empleos sobre los 140.000, según se desprende de un informe encargado por la Comisión de Comercio de CEOE a la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, en el que también se indica que esta reducción ha afectado de forma especial a las pequeñas empresas, lo que ha provocado una reducción de los autónomos y un incremento de los asalariados.

Durante la presentación del estudio, el presidente de la patronal castellana y leonesa, Santiago Aparicio, destacó que el comercio es uno de los motores de la economía de la Comunidad junto a la industria y la agricultura, así como un sector estratégico muy asentado y apegado al territorio y que se enfrenta al reto de la digitalización y a una serie

de cambios para adaptarse a las nuevas realidades.

Por su parte, el decano de la Facultad de Comercio de la Uva, José Antonio Salvador Insúa, explicó que en el informe también acaba con el estereotipo de que el comercio y el trabajo temporal van de la mano, dado que el 85,7% de los trabajadores del sector en la Comunidad tienen contratos fijos, porcentaje 11,6 puntos muy por encima de la media.

Respecto al número de empresas dedicadas al comercio, el estudio pone de manifiesto que en 2021 había 35.371 empresas dedicadas a este sector en Castilla y León, lo que supone un 22,5% del total de empresas activas en la Comunidad. En particular, el comercio minorista representa el 14,1% del sector empresarial regional, siendo la primera rama de actividad en número de empresas.

Además, otro aspecto destacado por el estudio es el incremento de casi un 28% en la productividad del sector, triplicando al del resto de sectores de la economía regional. Tanto Aparicio como Salvador Insúa recalcaron que este informe debe servir de base para todas las políticas que se pongan en marcha con la intención de propiciar los cambios que necesita el sector para adaptarse al cambio profundo



Santiago Aparicio, derecha, Julio Casado y José A. Salvador Insúa. ICAL

que está viviendo.

En este sentido, el decano de la Facultad de Comercio apuntó el crecimiento exponencial que está experimentado la venta de ropa online, que alcanza un 226%, aunque un 80% de las operaciones se realizan con páginas que están asentadas fuera de España. Además de reconocer que el 30% del comercio regional ya es online, insistió en que hay que hacer un esfuerzo muy importante para que los comercios de Castilla y León y de España sean capaces de atraer clientes online.

Cientes

Salvador Insúa rechazó que el comercio autonómico sea inmovilista y reconoció que está haciendo un gran esfuerzo por modernizarse. Además, indicó que además de la adaptación online, también es necesario mejorar la pre-

EL DATO

35.371

son las empresas dedicadas al comercio en Castilla y León, según los datos registrados en 2021, lo que representa el 22,5% del total de compañías activas en la Comunidad.

sencialidad y conocer mejor las preferencias de los clientes.

A su vez, y a preguntas sobre la necesidad de modificar los horarios comerciales, Salvador Insúa reclamó una reflexión y preguntó a quién beneficia el actual sistema, si a los comerciantes locales o a otros «que están más lejos, cuando las furgonetas de

reparto están trabajando hasta los domingos».

Por último, el presidente de la Comisión de Comercio, Julio Casado, además de recalcar la importancia del sector en la economía regional, indicó que, al igual que resto de empresas y particulares y debido al complejo escenario económico, son momentos en los que «toca pelear mucho».

El estudio ha sido promovido por la Comisión de Comercio de CEOE Castilla y León, con el objetivo de poner en valor al comercio y reivindicar su papel como sector estratégico en la economía regional, y ha contado también con la ayuda del Servicio de Estudios de CEOE, así como de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

El CES apela al Estatuto para cerrar la puerta a nuevos actores en el Consejo del Diálogo Social

Cabero afirma que las consejerías pueden reunirse con «quien quieran» pero la ley limita el órgano a los sindicatos y la patronal más representativos

EL NORTE

VALLADOLID. El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, aseguró ayer en Valladolid que la entrada de nuevos actores en el Consejo del Diálogo Social obliga a una modificación de la legislación estatal y autonómica. De esta

manera, salía al paso de las declaraciones del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien la semana pasada anunció que la Junta abrirá el Diálogo Social, durante el trámite participativo para negociar nuevos acuerdos en materia de políticas activas de empleo, a otros sindicatos «importantes» y con representatividad como Csiif, CGT y USO y a las Cámaras de Comercio y la asociación Empresa Familiar, por parte de la patronal.

Con motivo de un encuentro con sindicalistas latinoamericanos para intercambiar experiencias y dar a conocer el Diálogo Social de Castilla y León, Cabero apuntó que el Estatuto de Autonomía y la ley

que regula el Consejo del Diálogo Social definen el Diálogo Social. En concreto, citó la articulación que se hace en el marco constitucional, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores. «El Diálogo Social es el que hay y cualquier cambio supondría una modificación normativa. Me parece, y hablo como presidente y no como representante de toda la institución, que el Diálogo Social es con los interlocutores existentes en la actualidad. No puede ser de otra manera», sentenció.

El presidente del CES reiteró, según recogió la Agencia Ical, que la representatividad sindical y de las organizaciones empresariales está regulada a nivel estatal, al ser

competencia del Estado. Por lo tanto, precisó que los interlocutores con el Gobierno son los sindicatos más representativos y la organización empresarial que tiene la mayor representatividad. «Es lo que hay ahora y es lo que ha funcionado correctamente», añadió.

A su juicio, la propuesta de Veganzones es de funcionamiento de la Consejería pero no del Consejo del Diálogo Social, que responde al modelo que tiene la ley. «Las consejerías y el Gobierno tienen competencia para reunirse con quien quieran pero si hablamos del Consejo del Diálogo Social hay que ir a lo que dice el Estatuto de Autonomía, que es acor-

de con la legislación del Estado. El ordenamiento jurídico español dice que el Consejo del Diálogo Social es tripartito», significó.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo apostó por una negociación que sea «más diálogo y más social que nunca» al no contar solo con los miembros «privilegiados» de la participación institucional como los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE. No en vano, precisó que casi «cogobiernan» en la Junta ya que estas entidades tienen que estar, obligatoriamente, en «todos» los ámbitos de la participación institucional.

Conviene recordar que sindicatos y patronal dieron en diciembre de 2021 por «restituido» el Diálogo Social tras la salida de Ciudadanos del Gobierno de la Comunidad y la convocatoria de elecciones por parte de Alfonso Fernández Mañueco, que ponía fin, según los agentes sociales, a los ataques del entonces socio de coalición del Partido Popular.